



CSJ 2154/2017

ORIGINARIO

Volkswagen Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza e
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de julio de 2024

Vistos los autos: "Volkswagen Argentina S.A. c/Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", de los que

Resulta:

I) A fs. 69/89 vta. se presenta Volkswagen Argentina S.A. y deduce acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Salta, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de aplicarle una alícuota diferencial -más alta- en el impuesto a las actividades económicas, excluyéndola del beneficio dispuesto en el artículo 174, inciso w, del Código Fiscal provincial, en razón de no poseer su establecimiento productivo en la jurisdicción salteña.

Relata que la provincia demandada dictó, el 7 de septiembre de 2017, un ajuste impositivo por el período fiscal 07/2017, mediante el cual se la intimó al pago de la alícuota general del 3,60% establecida en el artículo 12 de la ley impositiva provincial 6611, por la actividad industrial "Fabricación de vehículos automotores" (código 341000), por lo que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la pretensión fiscal de la demandada y, de manera parcial, del artículo 174 inciso w del Código Fiscal provincial, por considerar que violan de forma directa lo establecido en los artículos 4°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75 -incisos 1°, 10 y 13- y 126, todos de la Constitución Nacional.

Describe los motivos por los cuales, a su entender, se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia formal de la demanda.

Expone que se dedica a la fabricación de vehículos automotores en todo el país, y que desarrolla su actividad a través de sus plantas industriales ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. A su vez, manifiesta que se encuentra inscripta como contribuyente del impuesto a las actividades económicas bajo el régimen general del Convenio Multilateral.

En este contexto, aduce que la pretensión tributaria provincial constituye una intromisión de las autoridades locales en un área de competencia de las autoridades federales la Nación, y una invasión a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio (artículos 75, inciso 13, y 126, de la Constitución Nacional), afecta las garantías de igualdad y de razonabilidad consagradas en la Ley Fundamental y constituye una discriminación que deriva en el establecimiento de una aduana interior, por lo que se afecta, asimismo, el principio de igualdad fiscal.

II) A fs. 100/102 la actora aclara que la ley local 8064 no tiene incidencia en el presente caso y, además, requiere que la medida cautelar oportunamente solicitada se extienda a los períodos fiscales posteriores a julio de 2017, hasta diciembre de ese año.

III) A fs. 94/94 vta. dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 104/105 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la actora las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre las actividades económicas por la actividad "Fabricación de vehículos automotores" (código 341000), que surgían de la nota



Corte Suprema de Justicia de la Nación

emitida en el marco del expediente 22-568.625/2017, hasta la entrada en vigencia de la ley local 8064, así como de trabar cualquier medida cautelar, todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

IV) A fs. 147/160 la Provincia de Salta contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, alega que el 7 de diciembre de 2017 el Estado provincial sancionó -en el marco del "Consenso Fiscal", suscripto el 16 de noviembre de 2017 con el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- la ley 8064, en cuyo artículo 6° se derogó el inciso w) del artículo 174 del Código Fiscal (decreto -ley 9/75 y sus modificatorias).

Señala que, en ejercicio de sus potestades tributarias, eximió del pago del Impuesto a las Actividades Económicas a las industrias cuya planta se encontrara radicada en la provincia, con la finalidad de promover el desarrollo de industrias en su territorio y de generar fuentes de trabajo genuino para sus habitantes, lo que se relaciona expresamente con la cláusula prevista en el art. 125 de la Constitución Nacional.

Asegura que la cláusula comercial no se encuentra vulnerada, ya que la provincia de Salta no ha efectuado un trato discriminatorio ni existe una múltiple imposición. Agrega que tampoco se incumple la prohibición de establecer aduanas interiores, ni los principios de igualdad y razonabilidad.

Entiende que corresponde el rechazo de la demanda, ya que la actora no probó el perjuicio que resulta de la aplicación de la norma al producto que comercializa en la

Provincia de Salta, "cuyos consumidores no poseen opción de compra ante la inexistencia de bienes sustitutos". Agrega que el impuesto, al ser trasladable, no es absorbido por la empresa, sino que es el consumidor quien, en definitiva, lo paga.

Expone los motivos por los que considera que están ausentes los presupuestos formales de la acción declarativa. Finalmente, añade que la mecánica del impuesto en la provincia ha tenido en miras "salvaguardar de la doble imposición a los productos que ingresan a Salta".

V) A fs. 177 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda.

Considerando:

1º) Que tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 104 /105, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de una norma local, el artículo 174, inc. w, del Código Fiscal provincial (decreto ley 9/75 y sus modificatorias), a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311 :421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver intimación provincial cuya copia certificada obra a fs. 5/7), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el sub lite presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014(50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que en su mérito, en el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al denegar la exención requerida por la accionante y, en consecuencia, gravar con la alícuota del 3,6 % la actividad industrial antes referida, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas indicadas en el considerando 3° y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo

del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Volkswagen Argentina S.A. contra la Provincia de Salta. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del requisito de poseer planta industrial en la Provincia de Salta, establecido en el artículo 174, inc. w, del Código Fiscal provincial (decreto ley 9/1975 y sus modificatorias), así como la de la intimación emitida por la Dirección General de Rentas provincial en el expediente 22-568.625/2017. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 2154/2017

ORIGINARIO

Volkswagen Argentina S.A. c/
Salta, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza e
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Volkswagen Argentina S.A.**, representada por la **doctora María Eugenia Bianchi**, con el patrocinio letrado del **doctor Eduardo Marcelo Gil Roca**.

Parte demandada: **Provincia de Salta**, representada por los **doctores Edgardo César Martinelli y María Macarena Alurralde Urtubey**.